



Comisión de Asuntos Municipales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

31 AGO 2006
12:25
Nelva

DICTAMEN

HONORABLE PLENO:

Con fecha veintidós de noviembre del año dos mil cinco, el Honorable Pleno del Congreso de la República conoció la iniciativa de Ley con registro número 3396, presentada por el Señor Presidente de la República, Licenciado Oscar Berger Perdomo, la cual dispone aprobar una nueva **Ley de Servicio Municipal**, habiéndola remitido a la Comisión de Asuntos Municipales, para su estudio y dictamen correspondiente.

Antecedentes:

La Comisión consideró pertinente que para el proceso de estudio de esta iniciativa de Ley, debería hacerse consultas a los Alcaldes Municipales del país y a sectores integrantes de los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural.

Durante el mes de febrero del presente año, se envió copia de la iniciativa de ley a los 331 Alcaldes Municipales del país y a los Presidentes de los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural, con el propósito de contar con su opinión; lamentablemente no se recibió aportes del total de las municipalidades, pero sí de algunas y de algunos Consejos Departamentales, con comentarios y valoraciones importantes.

Se llevaron a cabo reuniones con el señor Comisionado y Técnicos de la Comisión Presidencial para la Reforma, Modernización y Fortalecimiento del Estado y de sus Entidades Descentralizadas –COPRE–, en donde tuvieron la oportunidad de exponer el proyecto de la iniciativa de Ley presentada a este Alto Organismo.

Durante los meses de Abril y Mayo del presente año se recibieron aportes de las Municipalidades; las opiniones y valoraciones vertidas se resumen en la importancia de fortalecer la administración municipal, pero con manifestación clara de que la aprobación de la nueva ley



Comisión de Asuntos Municipales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

atenta contra la Autonomía Municipal, se crea un ente burocrático con poder de sustituir a las municipalidades en el ámbito de la administración de personal.

La Comisión de Asuntos Municipales realizó seminarios taller, para darle seguimiento al estudio y análisis de la iniciativa en referencia, compartir los aportes vertidos por los Alcaldes Municipales y otros sectores que han opinado. En estas actividades participaron Representantes de sectores conocedores del tema.

Finalidad de la Iniciativa de Ley:

La iniciativa pretende crear una nueva “Ley de Servicio Municipal” que sustituya a la vigente, por carecer de fundamentos prácticos y operativos, y crear un sistema de servicio municipal que modernice esta gestión, el establecimiento de la carrera administrativa y que regule la relación laboral entre éstas y los funcionarios y empleados municipales.

Análisis de la Comisión:

El proyecto de Ley de “Servicio Municipal” se integra por seis títulos con sus respectivos capítulos y secciones; al estudiar la iniciativa y examinar los resultados del proceso de consulta a las municipalidades y los aportes de sectores interesados en la misma, se concluyó con las siguientes consideraciones:

En el Título I, Capítulo Único, Disposiciones Generales. En este apartado, la iniciativa propuesta a este Organismo, plantea la parte filosófica de la misma, en donde define substancialmente lo del carácter, objeto, principios generales, ámbito, definiciones aplicables y la jerarquía constitucional de la misma; al examinarla se identifican imprecisiones, errores, contradicciones y en algunos casos no armoniza con la Constitución Política de la República, al no contemplar lo establecido en los artículos 262 “funcionarios” y “empleados” municipales; principio de justicia social indicado en el artículo 101 y el de derechos sociales mínimos contemplado en el artículo 102.

En el artículo 3, “Principios Generales”. Se considera que la mayoría de los mismos no son propios de esta regulación, son normas contenidas en la Constitución, que consagran derechos a todas las personas. El principio de “Justa Remuneración”, desequilibra el derecho contemplado en la literal c) del Artículo 102 Constitucional. El principio “Tutelaridad del Estado”, se interpreta



Comisión de Asuntos Municipales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

como una normativa peligrosa para la seguridad jurídica, porque de aprobarse, se correría el riesgo de postergar la plena vigencia de los derechos de los trabajadores municipales sobre la base de que tales derechos o su ejercicio colisionan con los intereses de la población y/o del bien común. El principio de “Transparencia y Objetividad”, no prevé que existen circunstancias en las cuales, aún en márgenes estrechos, no puede excluirse la discrecionalidad en el ejercicio de la función pública. Entre algunos de los principios se consideran criterios de servidumbre y no de igualdad.

En el Artículo 5 se definen los conceptos de “Funcionario” y “Servidor” Público Municipal, no se sustenta bases para hacer el cambio o sustituir los conceptos contemplados en el Artículo 262 Constitucional. Se considera imprecisión, cuando los funcionarios públicos no están bajo subordinación, porque esta característica es solo para el servidor público municipal, es decir que en este caso solamente son funcionarios los miembros del Concejo Municipal y en algún sentido el Alcalde.

Lo establecido en el artículo 6, en relación a “La interpretación y aplicación” de la ley propuesta, está regulado en el artículo 106 Constitucional y lo contemplado en el tercer párrafo del mismo artículo, no armoniza con lo establecido en el artículo 203 Constitucional, cuando este establece que corresponde a los Tribunales de Justicia la potestad de juzgar y promover ejecución.

Título II. Sistema de Servicio Municipal: Capítulo I. Organización para la Administración del Sistema de Servicio Municipal y Secciones I, II y III. En la creación de los tres órganos para la gestión del sistema de Servicio Municipal, **a) Órgano de Dirección Administrativa, b) Órgano de Ejecución y c) Órgano de Composición.** Se considera que provocarían perder derechos adquiridos de Autonomía Municipal en gestión administrativa y financiera, como se contemplan en el artículo 253 de la Constitución Política de la República y puede interpretarse como agravio que el Órgano de Ejecución sustituya al Concejo Municipal la dirección y administración del recurso humano de todos los municipios, cuando éste es el Gobierno Municipal legalmente constituido, quien tendría que trasladar sus potestades al nuevo órgano que funcionará afuera y por encima de cada municipalidad en lo relacionado a la administración de personal. El órgano de Composición, es administrativo, pero desarrollará funciones jurisdiccionales, que no son de su competencia; además atenta contra la imparcialidad, porque será el propio Concejo Municipal quien tramitará y resolverá los conflictos de naturaleza laboral, además este órgano asume tres funciones: Unidad de Conciliación Municipal, en el artículo 17; Órgano de Impugnación Administrativa, en el artículo 21 y en el artículo 75 como Tribunal de Conciliación, siendo estas facultades y funciones de jurisdicción privativa pertenecientes a la función jurisdiccional, lo cual contraviene lo indicado



Comisión de Asuntos Municipales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

en los artículos 378 y 379 del Código de Trabajo, y se aparta del Artículo 103 Constitucional, que dispone que todos los conflictos relativos al trabajo están sometidos a jurisdicción privativa.

En el artículo 8 el nombre “Secretaría Municipal de Servicio Civil”, crea el nombre del director de este ente, el cual puede crear confusión, si se toma en cuenta que el Director de la SEMUSEC se denomina “Secretario/a Municipal, como aparece en el artículo 9, lo cual induce a equivocación con el funcionario que presta sus servicios en cada municipalidad “Secretario Municipal”.

Se considera que el artículo 11, da lugar a inconstitucionalidad, una, porque contraviene lo indicado en el segundo párrafo del artículo 146 Constitucional, donde se establece que los guatemaltecos naturalizados tienen los mismos derechos que los de origen, salvo las limitaciones que establece la misma Constitución; otra, por cuestiones de edad, choca con el principio de igualdad que establece el artículo 4 de la Constitución y con el 136 literal d), que dispone el derecho a optar a cargos públicos al adquirir la ciudadanía o sea a los 18 años de edad, y la Ley Electoral y de Partidos Políticos en su artículo 2, dice que los guatemaltecos mayores de 18 años son mayores de edad; y con plena capacidad civil según el artículo 8 del Código Civil. Como ley ordinaria no podría establecer requisitos de edad para el ejercicio de cargos públicos, solamente por una norma constitucional.

En la sección III Órganos de Composición, se considera que da lugar ha confusión y fomenta un proceso altamente burocrático, porque en el artículo 17 en su integración, las Unidades de Conciliación son los Órganos de Composición y el Concejo Municipal constituido como Órgano de Conciliación Municipal, además afecta, porque pretende quitarle facultades al órgano jurisdiccional en la resolución de conflictos laborales, dejando plena facultad al patrono, y en el artículo 18 crea un sistema centralizado y altamente burocrático de conciliación en materia de faltas laborales leves y graves, cada caso se someterá a ese procedimiento de conciliación; esta circunstancia limitaría la amonestación sin que se acuda previamente al procedimiento de conciliación ante las Unidades de Conciliación Municipal.

Se considera que la regulación del procedimiento del proceso de conciliación interna, debe de establecerse en la Ley, y no como se establece en el artículo 20 párrafo segundo, que una resolución, podrá ser apelada al Concejo Municipal, y que un reglamento específico regula su procedimiento; no armoniza con lo establecido en los artículos 156 y 157 del Código Municipal, donde se contempla como medios de impugnación los Recursos de Revocatoria y Reposición, y estos dos recursos tiende a desaparecer en el artículo 21, contradiciendo lo establecido en el



Comisión de Asuntos Municipales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Artículo 160 del Código Municipal sobre el “procedimiento de impugnación” que se registrará por las disposiciones establecidas en la Ley de lo Contencioso Administrativo, que en su artículo 17 establece que los recursos administrativos de Revocatoria y Reposición son los únicos medios de impugnación ordinarios en toda administración pública centralizada y descentralizada o autónoma; en este artículo se reconoce como órgano de impugnación administrativa al órgano de Conciliación Municipal, en tal virtud se le adjudican típicas funciones jurisdiccionales, como lo establece claramente el artículo 73 de la nueva ley que se examina. Hasta ahora la función de recibir el planteamiento del conflicto, es un acto jurisdiccional asignado al Juez de Trabajo, según el Artículo 378 del Código de Trabajo

En el artículo 23 en el Proceso de Conciliación, se identifica contradicción entre el segundo y tercer párrafo, en uno se interpreta que el proceso de conciliación concluye con un dictamen, y el otro concluye con una resolución, además in visibilizan las partes en el proceso de conciliación, a no ser sólo el servidor público municipal que se somete al procedimiento por la posible comisión de una falta. No contempla plazos y prescripciones, para hacer funcional el sistema de indemnización, el cual debe estar enmarcado en la ley, y no en el reglamento respectivo, porque de ser así, el procedimiento entorpecería la aplicación directa de este artículo. Da lugar a inconstitucionalidad, porque limita las facultades de las Municipalidades a acudir a los Tribunales, violando el principio de igualdad contenido en la Constitución Política de la República, artículo 4.

Capítulo II, Régimen de Responsabilidad: En el artículo 24 relacionado a Derechos, los incisos a) y h) son contradictorios y excluyentes; en el a) establece que entre los derechos del funcionario y de los servidores públicos municipales “a no ser removidos de sus puestos, a menos que incurran en las causales de despido debidamente comprobadas, ...” y en el h) establece que el derecho del servidor público municipal despedido injustificadamente es recibir indemnización, con lo cual el derecho establecido en el inciso “a)” es inexistente, es decir que no es cierto el derecho de conservar sus cargos. Lo establecido en el Inciso h) viola principios tutelares constitucionales, el Derecho a la Indemnización a favor de Funcionarios de principal jerarquía por despido injustificado o indirecto. Es irrelevante el procedimiento administrativo para emitir el dictamen por parte de la SEMUSEC y su ratificación en el Concejo Municipal, porque al haber controversia con respecto a despido justificado o injustificado, quien tiene esta atribución es un juzgado y la única instancia que tiene la atribución de llevar por la vía administrativa la resolución de controversia es la Inspectoría de Trabajo Jurisdiccional.



Comisión de Asuntos Municipales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Título III, Capítulo 1, Subsistemas de Gestión de Recursos Humano. En la sección II se incurre en errores de redacción, en el artículo 28 que omite que el diseño organizativo se refiere a Servicio Civil Municipal y en el artículo 30 en el último párrafo, no precisa el concepto de parientes dentro de los grados de consanguinidad y afinidad que establece el Código Civil y utiliza la expresión “familiares”. En el artículo 31 no se contempla el concepto de “empleados” como se indica en el artículo 262 Constitucional, ya referido en estas consideraciones.

En la Sección III artículo 40 en lo referente a nombramiento y contratación, da lugar a inconstitucionalidad porque limita facultades y contradice un derecho adquirido de las municipalidades. Este artículo atenta contra la independencia y discrecionalidad que el Código Municipal, Artículo 53, inciso g) atribuye a cada una de las municipalidades del país para contratar a su personal, ya que pretende sujetar a las decisiones de la SEMUSEC los efectos del nombramiento del personal de cada municipalidad.

En la Sección V, artículo 44 Administración del desempeño, es un artículo que se considera incompleto, cuando en su último párrafo, dispone que el subsistema de administración del desempeño, se exceptúan los cargos por medio de elección popular, pero no se establece el procedimiento de Administración del desempeño, para funcionarios como Secretarios Municipales, Tesoreros, Registradores Civiles, miembros de comisiones o cuerpos directivos.

Sección VII Artículo 53, se considera incompleto, no contempla la Higiene y Seguridad en el Trabajo, de acuerdo al artículo 197 del Código de Trabajo y de su reglamento; tampoco se hace referencia del Convenio Internacional del Trabajo 161 y sus Reglamentos.

Con relación a los sindicatos de los servidores públicos de las municipalidades, los artículo 59 al 63 del proyecto de ley propuesto, son innecesarios, porque los mismos se registrarán conforme al Código de Trabajo establecidos en los artículos del 206 al 234 desde su formación, legalización y funcionamiento, por lo que no debe ser preocupación de la Secretaría Municipal de Servicio Civil, a no ser que se pretenda mejorar condiciones a los trabajadores y funcionarios municipales, en concordancia a las posibilidades económicas de las municipalidades. Lo regulado en el artículo 60, puede provocar desconfianza institucional en los trabajadores municipales, porque la SEMUSEC llevará el control del “registro especial de sindicatos”; y no las municipalidades. Los artículos 62 y 63 limitan lo establecido en el Artículo 106 Constitucional.

En Sección X, Desarrollo y Plan de Carrera, del artículo 66 al 71. La creación de la Carrera Administrativa se considera agravio a la autonomía municipal en la propuesta, como se



Comisión de Asuntos Municipales

Congreso de la República

Guatemala, C. A.

contempla en el artículo 66 que dispone que la Secretaría Municipal de Servicio Civil (SEMUSEC), sea el ente que emitirá las políticas y procedimientos necesarios para la administración de planes de carrera para las municipalidades, quedando cada municipalidad supeditada a esta institución. Lo contemplado en el artículo 69, no es funcional, porque cada municipalidad contrata a su personal de acuerdo a sus necesidades. Cuando este indica que las permutas pueden darse en la misma o en distinta institución, las permutas de personal entre municipalidades no se dan, por su autonomía e independencia administrativa. Los traslados como se contempla en el artículo 70 en su segundo párrafo "... cuando las máximas autoridades de la dependencia así lo dispongan...." Viene en perjuicio del empleado municipal, significaría inestabilidad laboral, dejarlo al criterio del patrono; tampoco aclara sobre los traslados temporales, condiciones y beneficios, para proteger los intereses municipales, y la estabilidad laboral del trabajador.

Artículo 71. Introduce un criterio de discriminación por cuestiones de edad, al establecer que a los 60 años de edad finaliza su carrera administrativa municipal, y si goza de buena salud, el espíritu no debe ser la edad, sea joven o de la tercera edad, sino la capacidad en el desempeño. Además toda persona tiene derecho a tener un ingreso económico seguro, mediante el acceso, sin discriminación, al trabajo, siempre y cuando se encuentre en buen estado de salud. El párrafo último de este artículo es inapropiado, porque no es en el reglamento donde se definen procedimientos, sino en la Ley, para afectar los derechos de una persona, en armonía con los derechos de acción, de defensa, petición y libre acceso como se establece en los artículos 5,12, 28, y 29 Constitucionales.

Titulo IV, Conflictos Colectivos y Derecho de Huelga, Capítulo 1, Los contenidos de esta materia contemplados en los artículos del 73 al 85 de la iniciativa de Ley de Servicio Municipal, no son necesarios, están regulados en el Código de Trabajo y en la Ley de Sindicalización y Regulación de Huelga de los Trabajadores del Estado, Decreto 71-86 del Congreso de la República, reformado por el No. 35-96, Se aplica a trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas y al analizar los contenidos de esos artículos se encuentran inconstitucionalidades y redacciones confusas.

En el Capítulo II, "Regulación de Huelga", El artículo 78 puede considerarse inconstitucional cuando contradice lo establecido en el Artículo 116 Constitucional, donde "se reconoce el derecho a Huelga de los trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas,... " este derecho y garantías está regulado en el Código de Trabajo como se indica al principio del párrafo anterior. Las causales para ejercer el derecho de huelga como se contempla en al artículo



Comisión de Asuntos Municipales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

80, se objetan las disposiciones contenidas en el mismo y da lugar a confusión; en los numerales 1 y 2: son por el incumplimiento del servidor público, lo que da a interpretar que los servidores públicos podrán declarar la huelga por su propio incumplimiento; en los numerales 3 y 4 se refieren a cancelación de nombramientos o a la existencia de represalias derivadas del contenido de un conflicto. Estas disposiciones hacen que la huelga ya no sea para los servidores públicos municipales un instrumento de negociación colectiva, sino solamente servirá para reaccionar ante despidos, represalias o ante la negativa a negociar.

Se considera inconstitucionalidad, lo contemplado en el artículo 84, es contraria al derecho de huelga otorgada por el Artículo 116 Constitucional y no armoniza con los convenios internacionales aplicables a esta materia cuando establece 15 días de duración, y lo consustancial de la huelga, es por tiempo indefinido. Este artículo hace interpretar que de tener un derecho de huelga constitucional, se pasa a tener un derecho a partir de la resolución dictada por el Órgano de Conciliación Municipal, que podría ser suspender la prestación de sus servicios por tiempo predeterminado o por anticipado.

Titulo V, Régimen Disciplinario, Capítulo Único, Faltas al Servicio. En el artículo 87, con relación a “Faltas en el Servicio”, existe imprecisión, contempla que las faltas serán desarrolladas por el “Reglamento Respectivo”, pero los artículos del 88 al 90 establecen conceptos y contemplan sanciones. En este artículo se establecen faltas y en el artículo 91 sanciones, estas serán desarrolladas por el Reglamento respectivo, en el proyecto no se precisa, no se especifica en que casos se aplicará cada una de esas sanciones, su aplicación sería ilegal por carecer de fundamento, lo cual hace **caer en la figura de norma sancionatoria en blanco**, lo cual es contrario al principio de legalidad y de seguridad jurídica. El desarrollo de las faltas debe quedar plenamente establecido en la Ley y no en el reglamento. En el artículo 90 existe una contradicción cuando se dice que hay una destitución “inmediata” “previo” proceso administrativo regulado en la presente ley; si existe un procedimiento administrativo no puede haber destitución inmediata. Se da imprecisión al imponer cualquier sanción o medida disciplinaria contemplada en la presente iniciativa, porque no se cuenta con un debido proceso administrativo regulado que cumpla con las garantías Constitucionales del derecho de defensa, derecho de audiencia y del debido proceso.

En el artículo 91, en la redacción, se encuentran errores y contradicciones, se dice que “las municipalidades” aplicarán sanciones: amonestación escrita, suspensión en el trabajo, sin goce de sueldo hasta un máximo de 60 días y despido justificado, pero en todo el capítulo Único, **Faltas**



Comisión de Asuntos Municipales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

al Servicio, no se determina que autoridad impone la amonestación verbal. Se dice que hay una suspensión en el trabajo sin goce de salario, pero no se especifica, para que clase de falta.

El artículo 93 en relación a despido justificado, tiene impresiones o desaciertos en su redacción; al principio, se refiere al despido justificado, “los servidores públicos municipales pueden ser despedidos de sus puestos si incurren en cualquiera de las faltas contemplada en esta ley o sus reglamentos” por medio del debido procedimiento, pero este procedimiento no está regulado en el proyecto de ley. En el segundo párrafo contempla cuales “son causas justas que facultan a la autoridad, para despedir a un servidor público...”, pero en el mismo artículo más adelante, puntualiza cuales son las causas justas para que se imponga esta medida extrema. En la literal a) nos conduce a un vacío, porque no desarrolla, que sería lo moral y lo correcto, para determinar la conducta del trabajador como empleado municipal. Cualquier vía de hecho que asumiera un servidor público municipal, por no existir el debido procedimiento, sería suficiente para un despido con “causa justa”. La valoración de inmoral o incorrecto se considera una imprecisión. En la literal g) existe despido justificado cuando el servidor público sea condenado en sentencia firme a la pena de prisión, pero hay casos de pena de prisión impuesta en sentencia que no es efectiva, porque existen beneficios como el perdón judicial, suspensión condicional de la pena, perdón del ofendido, conmuta. Como está redactado no procede. Entre estas imprecisiones se da en la literal h) cuando establece que “... incurra en acciones que están tipificadas como delitos en la legislación penal”, pero si el delito no está relacionado con el servicio público municipal, ni conlleve a la privación de la libertad, sería injusta su destitución porque tendría que cumplir con la pena, además de quedar desempleado. En la literal i) contempla la reincidencia en la comisión de una falta, se considera impreciso, porque no se detallan las faltas ni el tiempo limite para la reincidencia.

Lo contemplado en el artículo 94, puede promover actitudes perversas en contra del servidor público municipal, sería contrario a los derechos y garantías constitucionales adquiridas por el trabajador. El artículo 96 es contraproducente, al contemplar que la reinstalación las ordena el “Órgano de Conciliación Municipal”, dicho órgano no tiene facultades para hacerlo, éste solo formula recomendaciones para resolver conflictos surgidos entre las municipalidades y sus Trabajadores.

Título VI, Capítulo Único, Disposiciones Finales, Transitorias y de Implementación
Disposiciones Finales, El artículo 1 deroga el Decreto 1-87, afecta a los empleados municipales, porque desaparecen derechos adquiridos, como los que se contemplan en la Ley vigente, en el título 6, Capítulo Único que regula jornadas, descansos y días de asueto. Esta circunstancia hace



Comisión de Asuntos Municipales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

que el presente artículo no armonice con el segundo párrafo del artículo 106 de la Constitución Política de la República.

Con relación a lo establecido en el artículo 5, la convocatoria para celebrar Asamblea General Extraordinaria, debe realizarse después de su publicación y no de su aprobación, para cumplir con lo establecido en la Ley del Organismo Judicial en su Artículo 6, consideración aplicable a lo normado en el artículo 10 de la iniciativa estudiada.

De acuerdo a la interpretación que se hace a la iniciativa de ley, lo que se contempla en el artículo 6 en estas disposiciones finales, las Municipalidades no pueden reglamentar el funcionamiento de la "SEMUSEC" y el funcionamiento del "Órgano de Conciliación Municipal", porque esos órganos son administrativos, únicos y centralizados, es decir que funcionarán fuera de las municipalidades.

Conclusiones

En base a los argumentos expresados en la parte del análisis de este dictamen, se consideró que la iniciativa 3396, Ley de Servicio Municipal, en su conjunto burocratiza más el trámite para nombramiento, despido y sanción de trabajadores del servicio municipal, y que de ser aprobada violaría el principio de Autonomía Financiera Municipal y Libre Administración de sus bienes, al obligarlas a transferir del Presupuesto Municipal Anual, una suma alícuota, para la creación, funcionamiento, desarrollo y mantenimiento de la SEMUSEC. Habría inconstitucionalidades, porque contraviene y menoscaba garantías y derechos adquiridos por las Municipalidades del país, así como de los trabajadores municipales, establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, en el Código de Trabajo, Ley de Sindicalización y Regulación de la Huelga de los Trabajadores del Estado y realizaría atribuciones jurisdiccionales plenamente establecidas en el orden jurídico del Estado Guatemalteco.

Conociendo la importancia y el impacto social que tiene una ley que crea un sistema de servicio municipal práctico y operativo, que modernice la gestión municipal, estableciendo la Carrera Administrativa Municipal, es razonable la elaboración de un nuevo proyecto de ley, en donde contemple las condiciones establecidas en la Constitución Política de la República, armonice con el Código de Trabajo, con el Código Municipal, con los convenios de la OIT, en materia laboral, para garantizar el fortalecimiento institucional municipal, el desarrollo de capacidades de sus trabajadores y dotar de un mejor servicio a la ciudadanía.

Relonia



Comisión de Asuntos Municipales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Al tenor de lo antes expuesto, la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso de la República emite **DICTAMEN DESFAVORABLE** a la iniciativa de ley número 3396, permitiéndose elevarla al conocimiento y consideración del Honorable Pleno del Congreso de la República, para que decida sobre su aprobación y proceda lo que en ley corresponde.

relator

EMITIDO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, EL VEINTIOCHO DE JUNIO DEL AÑO DOSMIL SEIS.

Reynabel Estrada Roca
Reynabel Estrada Roca
Presidente

Matías Ajvix Locón
Matías Ajvix Locón
Vicepresidente

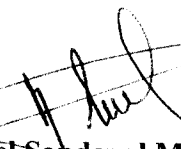
Hilda Jeanette Pérez Reyes
Hilda Jeanette Pérez Reyes
Secretaria

Carlos Alberto Guerrero Dumani
Carlos Alberto Guerrero Dumani

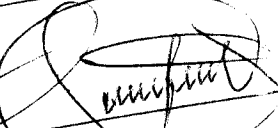
Byron Juventino Chacón Ardón
Byron Juventino Chacón Ardón



Comisión de Asuntos Municipales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.


Abel Sandoval Martínez


Roderico Alfredo Martínez Escobedo


Juan Francisco Cárdenas Argueta

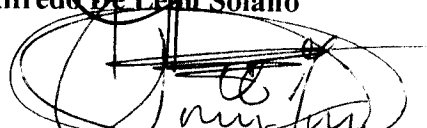

Enrique Pinto Martínez


Lilian Elizabeth Denis


Gloria Marina Barillas Carías de Duarte


Alfredo De León Solano


Edgar Antonio Almengor Pérez


Salvador Raymundo González Gómez


Elmer Medardo Cruz González Navarro


Roberto Kestler Velásquez


Sergio Leonel Celis Navas


Pedro Pascual Simón Vásquez


Ricardo Antonio Saravia Torrebiarte